

## RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ÁFRICA: EXPERIENCIAS PARA CONTRIBUIR A LA REFLEXIÓN EN TORNO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA<sup>1</sup>

### Introducción

Reflexionar en torno a la resolución de conflictos en África una presentación de la situación belicosa en distintos países africanos, con el fin de despejar el campo de aprehensión del periodo posterior a los conflictos. En efecto, el continente africano, configurado actualmente por 54 Estados ha sido marcado por conflictos internos e interestatales después de las olas de independencia en los años 60s. La búsqueda desesperada de la construcción de la Nación en los territorios definidos por las fronteras delimitadas por estos Estados ha llevado a los líderes y actores políticos africanos, igual que los estudiosos africanos y africanistas, a colocar la problemática de las guerras y el post-conflicto en el centro de los debates relacionados con la política africana. En este orden de ideas, el artículo aborda el tema de la gestión política que se hace del conflicto y el periodo post-conflicto, igual que el trato que se le da en la

agenda africana de política nacional e internacional. De modo que, se espera que de este ejercicio, se desprendan elementos comparativos de reflexión, análisis y debates acerca del proceso de paz en Colombia.

### Una mirada panorámica sobre las situaciones de conflicto y post-conflicto en el continente africano

Implica hacer un repaso de los conflictos políticos que azotan al continente africano, y que suelen ser reforzados por motivos que atraviesan cuestiones étnicas e identitarias, en el marco de las delimitaciones territoriales trazadas desde la colonización<sup>2</sup>. Además, el neocolonialismo, relacionado con distintas maniobras de sometimiento del continente africano, sus pueblos y dirigentes, a las lógicas de la explotación y el saqueo de los recursos minerales mediante la implantación de multinacionales y el ascenso de gobiernos títeres en África, explica en buena medida los orígenes de estas guerras.

1 Maguemati Wabgou. Profesor Departamento de Ciencias Políticas. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Responsable del grupo "Migraciones y Desplazamientos" -unijus-. Integrante del Grupo de Estudios Afrocolombianos (GEA-CES). Correo: mwabgou@unal.edu.co

2 Colonización que ha implicado también la de la mente y la mentalidad de buena parte de la élite africana, tal como lo denunciaron Fanon (2009; 2001), Cabral (1973), Rodney (2011), Nkrumah (2001) y Kenyatta (1971), entre otros.



En efecto, una mirada global sobre la situación belicosa en el continente africano permite categorizar estas guerras en *conflictos internos e interestatales*. Los conflictos internos suelen tomar dos orientaciones o formas: la guerra de sucesión y la de secesión. Por un lado, *la sucesión* de un gobierno conlleva, en algunos casos, problemas de violencia por parte del Estado y los grupos de rebeldes que luchan para la “liberación nacional”, entendida como *la liberación del pueblo del yugo de las derivas autoritarias, las injusticias socioeconómicas, el etnicismo, sectarismo y clientelismo político* de la clase reinante. Además, en los años 90, a raíz de las olas de democratización de los países africanos, asistimos a protestas derivadas de la inconformidad de los perdedores con respecto a los resultados de las contiendas electorales. Lo que les lleva a recurrir a las armas para intentar acceder al poder, ya que no se pudo por medio de las elecciones. Estas elecciones multipartidistas de corte liberal siguen siendo la excusa en la que se escudan algunos sectores de la clase política y del ejército africano para apostar por una opción bélica o apoyarla logística, estratégica e intelectualmente. Los ejemplos son numerosos, pero nos limitamos a los que nos parecen más relevantes.

La guerra de liberación de Angola que empezó desde los comienzos de 1975 (año de su independencia) ha enfrentado, en la zona centro-oeste, las tropas gubernamentales con las guerrillas anticomunistas de la Unita (Unión para la Independencia Total de Angola) encabezadas por Jonas Savimbi con el apoyo de Zaire (actual R.D.C.), Sudáfrica y EE. UU. A pesar de la firma de la Declaración de Gbadolite, por 18 jefes de Estado africano, poniendo fin a esta “cruenta guerra civil”, el 22 de junio de 1989, y seguido por el retiro de las fuerzas cubanas del territorio angoleño (40.000 soldados), situa-

ción que, junto con el asesinato de Savimbi, introduce el fin oficial de la guerra seguido de elecciones multipartidistas.

El caso de Liberia es también muy ilustrativo de las guerras de sucesión en África. Desde noviembre de 1989 empezó una sangrienta guerra entre las fuerzas armadas regulares y el principal grupo guerrillero FNPL (Frente Nacional Patriótico de Liberia) liderado por Charles Taylor. Después del asesinato del presidente Samuel Doe en 1990, se incrementaron violentos combates entre los grupos guerrilleros rivales (tropas de los señores de guerra de Ahmadou Kromah, Prince Johnson y Charles Taylor) que tenían como objetivo el poder. Los distintos acuerdos de paz (Abudja, Abidjan y Accra) no lograron poner fin a la inseguridad generalizada y a la inestabilidad política de Liberia. Fue necesario esperar las elecciones celebradas el 17 de julio de 1997 para que se detuvieran los enfrentamientos, con la victoria de Charles Taylor (75 por ciento de los votos), quien siempre ha reivindicado la autenticidad de su lucha para la liberación del pueblo liberiano.

Otros ejemplos de guerras de sucesión más recientes son los de la República Centroafricana (2001-2003; 2005-2008; diciembre de 2012- marzo de 2013), la República Democrática del Congo en la región de los Grandes Lagos (1996 hasta hoy) y el conflicto de Congo Brazzaville de Lisouba derivado de la venganza de Denis Sassou Ngueso, presidente perdedor de las elecciones de 1995, con sus milicias; afirmando así su deseo de volver al poder por las armas, deseo que se hizo realidad en noviembre de 1997. Igualmente, señalamos a propósito, las guerras de Zimbabue (1963-80), Uganda (desde 1981 hasta la actualidad), Sudán (1954 y

1972; 1983-2011)<sup>3</sup>, Mozambique (1977-1992), Sierra Leona(1991-2000), Suráfrica (1961-1992), Burundi (1993-2011), Ruanda (1990-1994; abril a junio de 1994), Argelia (1994-1998), Costa de Marfil (2002-2007; 2010-2011), Chad (1963 hasta la actualidad), Somalia (1981 hasta hoy), entre otras.

En cuanto a las *guerras de secesión*, muchas de ellas son guerras “olvidadas” o de “baja intensidad”. En general, se trata de regiones o grupos sociales que se sienten discriminados por la escasez o carencia de asistencia económica, la falta de promoción de sus culturas (integración de la enseñanza de sus lenguas en los programas de la educación formal suele ser objeto de reivindicación) y otros aspectos socioculturales y políticos. Su descontento se expresa más por una insumisión al poder central (o centralismo del poder) tras el uso de armas, no sólo para hacerse escuchar sino también para exigir su independencia (secesión), cuestión que altera la estabilidad política. Los casos de la guerra de secesión de Katanga (1960-1961), un territorio en el sur del ex Congo Belga; de Biafra (sureste de Nigeria: 1967-1970), los pueblos Ogoni en el Estado Rivers (sureste de Nigeria) del Movimiento de la Supervivencia de los Pueblos Ogoni-Mosop en su sigla en inglés- (1990-actualidad), y los pueblos Ijaw (1990-actualidad) en el Estado de Delta (sureste de Nigeria); Sahara Occidental (1973-hoy), Casamance en Senegal (1982- actualidad), de los Tuar-

reg en Malí (desde los años 60s y 90s hasta la actualidad) son ilustrativos.

Comentando brevemente los casos de Biafra, Malí y Sahara Occidental, señalamos que los inicios del primer caso remontan al año 1967. En este momento, surgieron discrepancias entre el gobierno federal y el de la región meridional respecto a la repartición de ingresos provenientes de la industria del petróleo. Después de la abolición de algunas regiones por el General Gowon, seguida del anuncio de su intención de establecer sólo doce Estados, Ojukwu hizo pública la secesión de la región del este, Biafra, y proclamó la independencia de la “República de Biafra” el 30 de mayo de 1967. Los sangrientos enfrentamientos entre las tropas secesionistas y federales no se hicieron esperar y culminaron con el aplastamiento de las primeras en enero de 1970. En Malí, desde la creación del Estado en 1960, los sectores más radicales de la población tuareg del norte del país se han constituido en un grupo que rechaza el centralismo del Estado maliense debido a la marginación cultural y económica que padece particularmente en Malí y Níger<sup>4</sup>.

Por lo tanto, recurrieron a la lucha política y armada bajo Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA). En enero del año 2012, el MNLA inició una nueva rebelión, y proclamó la independencia del Estado de Azawad, en el norte Malí (ciudades de Tombuctú, Kidal y Gao). Sin embargo, esta coyuntura política ha sido recuperada políticamente por procesos de islamización radical, liderados por los Organización Al-Qaeda en el Magreb Islámi-

3 Este conflicto que comenzó como de secesión terminó desembocándose en una guerra de secesión, con la proclamación de la república independiente de Sudán del Sur, bajo la supervisión de la Comunidad internacional, aun si persisten tensiones sobre Heglig, una zona petrolífera situada entre el Sudán del norte y el Sudán del Sur.

4 Cabe precisar que los tuaregs se extienden por cinco países africanos; esto es, Argelia, Libia, Níger, Malí y Burkina Faso.



co (AQIM), los beligerantes islamistas del grupo d'Ansar Dine y el Movimiento para la Unidad y el Jihad en África del Oeste (Mujao). Así mismo, la parte norte de Malí ha estado afectado por enfrentamientos entre grupos rebeldes e islamistas y el ejército maliense (Heidelberg Institute for International Conflict Research, 2011); lo que ha desembocado en la intervención militar de Francia, con el fin de parar el avance y el terror producido por los islamistas quienes contribuyen al empeoramiento de la inestabilidad del Estado maliense. Situación que a su vez desata reflexiones y debates sobre el intervencionismo francés en África.

Finalmente, el caso de la anexión del Sahara Occidental por Marruecos expresa una lógica imperialista de expansión territorial del Estado marroquí por motivos geopolíticos y económicos, a la vez que agudiza el conflicto armado liderado desde 1973 por el Frente Polisario: “[...] como movimiento armado considera la independencia del Sahara Occidental y del pueblo saharauí como la única vía para la creación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). En este sentido, en febrero de 1976 proclamó la organización de la RASD y emprendió una guerra de liberación del territorio contra Marruecos y Mauritania. Tres años después Mauritania fue derrotada, firmando la paz con el Frente Polisario y renunciando a sus pretensiones en el territorio saharauí, mientras que la situación de conflicto se vio acentuada con Marruecos sobre todo por la anexión de todo el territorio saharauí” (Penagos, 2007: 80).

Cabe destacar el hecho de que, en ambas tipologías de conflictos políticos internos, persiste un trasfondo étnico en la medida que las identidades étnicas suelen estar instrumentalizadas para fines políticos, teniendo en cuenta la complejidad de las re-

laciones entre etnicidad, sociedad, nación, Estado y economía. Al respecto, se hicieron consideraciones sobre el Estado moderno y la cuestión nacional en África negra en un trabajo anterior (Wabgou, 2007:51-72).

Por su parte, los **conflictos interestatales** son los que implican el enfrentamiento de dos o más Estados, derivados en general de la delimitación de las fronteras y las riquezas naturales ligadas a los territorios en disputa. Estos conflictos han sido más frecuentes poco después de los procesos de surgimiento de los jóvenes Estados independientes africanos en el periodo comprendido entre los 60s y 80s. Aquí, la problemática del territorio se ubica en el centro de las tensiones y disputas belicosas en torno a los principios de *frontera* y *soberanía*. Sin embargo, cabe destacar el hecho de que, en la actualidad, estos conflictos ya no se están presentando de forma frecuente debido a la adhesión de los países al principio de *intangibilidad de las fronteras*<sup>5</sup>; más aun en el marco global de la reivindicación del panfricanismo<sup>6</sup> desde la Unión Africana (UA), por parte de los actores actuales africanos y la persistencia de demandas identitarias y políticas para el reconocimiento de los

5 Recordamos que este principio de la integridad y la intangibilidad de las fronteras es reconocido en la Carta de la Organización para la Unidad Africana (OUA, actual Unión Africana -UA) desde mayo de 1963. Aún así, no han impedido ambiciones de expansión territorial por parte de algunos actores políticos africanos.

6 Los adalides de esta ideología han sido personajes carismáticos en sus países: se trata del ghanés Kwame Nkrumah, el Egipto Nasser (junto con el panarabismo y el nasserismo), el guineano (Conakry) Sekou Touré, el tanzano Julius Nyerere, el congoleño (ex Zaire) Patricio Lumumba, el nigeriano Nnandi Azikiwe, entre otros.



territorios ancestrales, marcadas por tensiones susceptibles de estallar en conflictos de secesión. El registro de algunos de los casos más emblemáticos en el continente muestra las tensiones entre Ghana y Togo (1963-1965), Ghana y Alto Volta (actual Burkina Faso-en 1963), Camerún y Nigeria (desde 1961-1963), Níger y Dahomey, actual Benín, (desde diciembre 1963 hasta marzo de 1964), Malawi y Tanzania (desde 1964 hasta 1968) con el problema del lago Nyassa; y los conflictos entre Mauritania y Senegal en junio de 1989, Libia y Chad entre 1973 y 1989 con respecto al territorio fronterizo de la banda de Aouzou, ocupado por Libia del coronel Moammar Gadafi. Por cierto, cada uno de estas situaciones causó fuertes situaciones de inseguridad nacional e inestabilidad política, tanto en el interior de los países implicados como en la región en la que están ubicados.

### Escenarios de resolución de conflictos y post-conflicto

Los actores implicados en los espacios de negociación para el fin de la guerra suelen ser los beligerantes (o rebeldes), el Estado (y su ejército), la comunidad internacional africana, quien actúa en virtud del principio del intervencionismo internacional, mediante sus organizaciones de integración continental y regional (UA, Cedeao, SADC, Ligas de Defensa de los Derechos Humanos -DDHH-, etc.), la comunidad internacional no africana (las potencias europeas -ex Metrópolis-, Estados Unidos, la ONU, las ONG, la Liga de Defensa del Derecho Internacional Humanitario -DIH-, la sociedad civil, etc.). De modo que, esta situación invita a una reflexión seria, serena y crítica sobre el intervencionismo de las organizaciones internacionales en la construcción de la Paz y la Justicia en África.

Sin duda, esta situación invita a una reflexión seria, serena y crítica sobre el intervencionismo de las organizaciones internacionales en la construcción de la Paz y la Justicia en África en la medida que, por un lado, los escenarios de *resolución de conflictos fronterizos (o interestatales)* y *post-conflictos* son marcados por el papel preponderante de la Organización para la Unidad Africana (actual UA) mediante la celebración de cumbres de Paz, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la intervención de Francia, EE. UU. y Gran Bretaña. Por ejemplo el acuerdo de 1989 entre Libia y Chad fue reiterado ante la Corte Internacional de Justicia en 1994. Por otro lado, en el caso de *los conflictos internos*, se observan tres tipos de situaciones que les ponen fin, abriendo posibilidades al periodo de post-conflicto.

En primer lugar, se suele recurrir a un acuerdo de Alto al Fuego que permitiría la puesta en marcha de conversaciones para la Paz entre los actores principales de la guerra (guerrilla y Estado) en el país, con el acompañamiento de la comunidad internacional. Sin embargo, esta situación no impide que se registren casos de tiroteos esporádicos de ambas partes. En el mejor de los casos, las negociaciones pueden desembocar en la decisión de desarme, reinserción y reintegración de los ex-rebeldes en la sociedad civil; lo que implica amnistía a todos los miembros de los grupos rebeldes, excepto los casos de crímenes de lesa humanidad. Así mismo, se espera una conversión de los grupos rebeldes en partidos o movimientos exclusivamente con carácter político, para “competir” en el marco de la democracia multipartidista. Por cuestiones de índole coyuntural, ligada a la premura de tiempo y la sensibilidad extrema de la población victimaria, la problemática de las víctimas y sus reparaciones suelen ser postergadas o aplazadas, para que el gobierno, que sur-



ge del post-conflicto mediante las elecciones, sea quien se encargue propiamente del tema con una agenda bien definida.

En segundo lugar, estas negociaciones desembocan, *in situ*, en la formación de un Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de transición hacia un nuevo orden político a nivel nacional. Esta situación implica el nombramiento del líder del principal grupo rebelde como vicepresidente o primer ministro, dependiendo del carácter parlamentario o presidencialista del sistema político. De igual manera, se considera la posibilidad de vincular en puestos importantes, si así lo desean, a varios integrantes influyentes de otros grupos beligerantes minoritarios que se hayan adherido a las lógicas del proceso de paz. Este ejercicio de reparto del poder se inscribe en el marco del espíritu de “cohabitación” y se inserta en un contexto de reconstrucción política con una lógica de la búsqueda de un consenso político que convierte la transición en un punto clave hacia las elecciones multipartidistas.

En último lugar, se asiste al fin de la guerra porque una de las partes la ha ganado. En este caso, se impone la lógica de Paz, según los criterios de los vencedores. Y, los vencidos, en situación indefensa, se rinden y se someten al “diktat” del sector triunfador. Aquí, cabe subrayar el hecho de que aunque el Estado y su ejército suelen ser los ganadores, existen casos como el ruandés en el que el Frente Patriótico Ruandés (FPR), liderado por el rebelde tutsi Paul Kagamé salió victorioso del conflicto de 1994: así pudo imponer sus reglas de juego para la pacificación del país, de las cuales se destaca la aplicación del principio de Justicia Transicional. En todos los casos, el post-conflicto implica la resolución de los conflictos inscrita en la lógica general de los

*procesos de paz y mecanismos* de los cuales se destaca la *justicia transicional*.

Desde el punto de vista judicial, tiene una particular importancia la instauración de mecanismos de justicia a nivel internacional dentro del marco del post-conflicto, Justicia transicional y reconciliación en Ruanda, aún sabiendo que los mecanismos judiciales internacionales tienen principalmente el propósito de juzgar a los grupos políticos militares responsables de la planificación y ejecución de estos crímenes atroces. Por lo tanto, señalamos la creación del **Tribunal Penal Internacional para Ruanda** (TPIR), mediante la Resolución No955 del 8 de noviembre de 1994 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, modificada el 30 de abril de 1998 por la Resolución 1165 del mismo organismo. La estructura base de esta institución es parecida a la del Tribunal Penal Internacional (TPI) para la ex-Yugoslavia. Con sede en Arusha (Tanzania), y en aplicación del Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y al Protocolo II de 1977, el TPIR tiene como objetivo juzgar a las personas implicadas en el genocidio de Ruanda.

Sin embargo, también existen espacios de arreglo de conflictos, **espacios de reconciliación no judiciales en el marco de la justicia alternativa** que funcionan con base en mecanismos tradicionales o cuasi judiciales, como los derivados de la aplicación de la *justicia tradicional* cuyo objetivo principal es restablecer la *confianza* entre los miembros de las comunidades afectadas por el conflicto, siendo esta confianza un elemento o parámetro clave para la reconciliación y central a la comprensión de las situaciones de post-conflicto. Por ejemplo, en Ruanda, se destacan los *gacaca* promovidos por el gobierno de Paul Kagame: se trata de un estilo particular de justicia tran-

sional en el nuevo orden nacional donde no se busca el consenso en torno a la reconciliación sino procesos de catarsis popular mediante el cual la víctima, o pariente de la misma, puede identificar y acusar públicamente a su victimario. Se trata de un modo de rendición de cuentas con carácter tradicional y popular que conlleva la necesidad de visibilizar al victimario, someterlo al juicio y castigarlo, abriendo así caminos para procesos de sanación y construcción de la confianza entre los integrantes de las comunidades afectadas; y pactando la reparación. Pese a sus limitaciones, afanzamos los planteamientos de Castel (2009: 58) según los cuales “[...] los *gacaca* incorporan a la justicia transicional la tradición, meramente reducida a lo simbólico. El poder [oficialista] amolda a los *gacaca* para que éstos sean presentados como tribunales modernos, es decir, democráticos y garantes de los derechos de los acusados”.

De todas formas, la justicia transicional evoca la necesidad de consolidar la construcción de un nuevo orden político, donde los ciudadanos gozan plenamente de derechos fundamentales de igualdad y participación política, entre otros. Para ello, se requiere la puesta en marcha de mecanismos propicios a un contexto sociopolítico marcado por políticas públicas de justicia, reparación y reconciliación, entre otras. Pues la voluntad y honestidad política de todas las partes es necesaria para promover la reconciliación y la restauración de la población en general; igual que la afectada directamente por los conflictos en particular.

**A modo de cierre**, las experiencias africanas del post-conflicto y construcción de la Paz apuntan en general a tres opciones: (a) el acuerdo de Alto al Fuego que permitiría la puesta en marcha de conversaciones para la Paz entre los actores principales de la gue-

rra, con acuerdos de desarme, participación política, reinserción y reintegración de los ex-rebeldes en la sociedad civil; (b) formación de un Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de transición hacia un nuevo orden político a nivel nacional marcado por la organización de elecciones multipartidistas; (c) la imposición de la lógica de la “Paz de los vencedores” derivada del fin de la guerra por motivos de la victoria militar de una de las partes. En los dos primeros casos, se registra que, además del acompañamiento de la comunidad internacional africana, también se encuentra la no africana, en el marco del intervencionismo internacional, de la cual se destacan dos formas concretas: el *Peacekeeping* que suele limitarse a garantizar el respeto del alto al fuego y el *Peacebuilding operations* que va más allá del orden disuasivo de su intervención y abarca el cumplimiento de los acuerdos de desarme, desmovilización, reparación de infraestructuras, etc.

En todo caso, insistimos en que los acontecimientos bélicos contribuyen a la seria violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en contextos estatales, regionales e internacionales africanos donde apenas el Estado juega su rol tradicional y a duras penas hace esfuerzos para mantenerse y preservarse como punto de referencia central del sistema político moderno, teniendo en cuenta la dificultad de la construcción y consolidación de la nación. A propósito del Estado, se evidencia que los conflictos africanos resultan tanto del debilitamiento del poder estatal como el exceso de su carácter centralista, con un trasfondo de tensiones étnicas. Sin embargo, este Estado que es representado por gobiernos de turno que suelen carecer de legitimidad, es el encargado de preservar las leyes y garantizar la justicia.



Así, el post-conflicto africano en general, desvela la compatibilidad entre los mecanismos judiciales internacionales que buscan juzgar a los grupos y personas armadas, responsables de crímenes y los mecanismos no judiciales de arreglo. En este sentido, se precisa que la rendición de cuentas puede tomar muchas formas, de las cuales se destacan las Comisiones de la Verdad y las Comisiones de la Verdad y la Reconciliación, como las que se establecieron en Sudáfrica después del apartheid, en Sierra Leona después de la firma del Acuerdo de Paz de Lomé en 1999; en Burundi, los acuerdos de Arusha del año 2000 que establecieron la rehabilitación de los *bushingantahe*<sup>7</sup> (sistema tradicional de gestión de conflictos en Burundi), a los que apenas están atribuyendo un papel determinado en el marco de la justicia transicional; y Ruanda se destaca con las cortes nacionales y los métodos tradicionales, como los sistemas de tribunales *gacaca*, para la resolución de sus conflictos.

En general, estas comisiones de reconciliación no judiciales y los mecanismos tradicionales, se asocian a la disposición judicial internacional para impulsar la Paz en el marco de un proceso de justicia transicional: se convierten en foros no judiciales para que quienes hayan cometido actos de violencia a gran escala, asuman públicamente los mismos. Y, además de constituirse en un mecanismo que permite la creación de un registro de casos de violación de derechos humanos, la justicia transicional provee recomendaciones al gobierno para prevenir futuros conflictos y judiciales de arreglo del daño sufrido a las víctimas. En cuanto a las Comisiones de la Verdad y la Recon-

ciliación, precisamos que se han convertido en una práctica habitual en aquellos países que buscan reconciliarse con su pasado de guerra y represión, experiencias de las cuales Colombia podría, desde una perspectiva comparativa, tomar algunos elementos más adecuados a su especificidad para consolidar su deseo de pasar de la época oscura de los conflictos al periodo post-conflicto.

### Bibliografía

- Cabral, Amilcar. (1973). *Return to the Source: Selected Speeches of Amilcar Cabral*. New York: Africa Information Service.
- Castel Antoni. (2009). "Procesos de Reconciliación Posbélica en África Subsahariana: la justicia tradicional en la reconciliación de Rwanda y Burundi". *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, No. 87, octubre, pp. 53-63.
- Fanon, Franz. (2009 [original 1952]). *Piel Negra, Máscaras Blancas*. Madrid: Akal.
- Fanon, Franz. (2001 [original 1961]). *Los Condenados de la Tierra*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Heidelberg Institute for International Conflict Research. (2011). *Conflict Barometer 2011 disputes, non-violent crisis, violent crisis, limited wars*. Alemania: Universidad de Heidelberg, Heidelberg.
- Kenyatta, Jomo. (1971). *The challenge of Uhuru: The progress of Kenya, 1968 to 1970*. Nairobi (Kenya): East African Publishing House.
- Nkrumah, Kwame. (2001 [original 1964]). *Conscientism: Philosophy and Ideology for Decolonisation*. London: Panaf Books.
- Penagos, Lisandro. (2007). "Sahara Occidental: Entre la invisibilidad y el reconocimiento internacional", en Maguemati Wabgou (comp. & ed.) *Sistemas políticos africanos. Debates Contemporáneos en Colombia desde la Ciencia Política*. Bogotá: Universidad nacional de Colombia, Grupo Migraciones y Desplazamientos, Grupo de Estudios Afrocolombianos (GEA-CES), pp. 79-91

7 Según Castel (2009: 59), "Bushingantahe significa en lengua kirundi <<aquellos que plantan el bastón de la justicia>>".



## ACUERDOS DE PAZ Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS EXCOMBATIENTES EN COSTA DE MARFIL: APORTES AL DEBATE EN TORNO AL TEMA DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EL POST-CONFLICTO COLOMBIANO<sup>8</sup>

### Antecedentes e inicio del conflicto en Costa de Marfil

Situado en el África Occidental, Costa de Marfil comparte sus fronteras terrestres con Ghana al oeste, Liberia y Guinea Conakry al este, Burkina Faso al norte, el océano atlántico al sur. El país obtiene su independencia en 1960 de Francia, y así comienza el periodo de gobierno de Houphouët Boigny que se extenderá hasta el año de 1993, cuando muere en pleno ejercicio del poder.

Durante su gobierno, el país vive en términos económicos un crecimiento sostenido, mientras que políticamente se presentan una serie de crisis de las relaciones Estado-partido, cuya solución política en 1983

por ejemplo consistió en reafirmar la primacía del Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI); esto es, el papel dirigente del partido (Sylla, 2005: 217). Este crecimiento económico, estuvo acompañado de la implementación de políticas que ayudaban a lograr una unidad territorial y nacional en un contexto marcado por la búsqueda desesperada de la construcción de la nación marfileña y del orgullo de sentirse marfileño, más allá del origen y la ascendencia de las personas cuya presencia deriva de procesos migratorios tradicionales y ancestrales en la zona. Al respecto, la observación de Labonté (2006: 60-61) ilustra la situación descrita, en la medida que “en lo relacionado con el trato de los diferentes grupos étnicos en Costa de Marfil, Houphouët-Boigny parecía reunir «en el mismo Estado, regiones, grupos étnicos y religiones en torno a un mismo proyecto nacional». La política de Houphouët-Boigny se constituyó, entre otras, de acciones simbólicas como las «fiestas rotativas». Las cuales consistían en que cada año, la celebración de la fiesta nacional de independencia del país se organizara en una ciudad diferente. Así, además de sembrar e incitar expresiones de orgullo nacional en cada ciudad, se beneficiaba de las logísticas necesarias para dicha celebración y provenientes de los equipos de las inversiones públicas des-

8 Maguemati Wabgou. Profesor Departamento de Ciencias Políticas. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Responsable del grupo “Migraciones y Desplazamientos” –Unijus. Integrante del Grupo de Estudios Afrocolombianos (GEA-CES). Correo: mwabgou@unal.edu.co  
Salgado Beltrán, Angela. Estudiante Departamento de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Integrante del grupo “Migraciones y Desplazamientos” –Unijus-. Correo: aisalgadob@unal.edu.co



plegados para la ocasión”<sup>9</sup>. Además, estas estrategias por parte del gobierno, también buscaban incluir a los extranjeros que vivían en Costa de Marfil o más bien a los “ciudadanos extranjeros” marfileños, por lo cual es posible sostener la existencia de una política de integración y participación ciudadana durante el gobierno de Boigny.

Sin embargo, ante la situación descrita, el/a conocedor/a avezado/a de la realidad política marfileña pondría sobre el tapete unas preguntas: pues, ¿por qué, tras la muerte de Houphouët Boigny en 1993, surgieron problemas relacionados con la ciudadanía, hasta tal punto que su instrumentalización política estuvo en gran medida al origen del estallido del conflicto entre 2002 y 2007? Es decir, ¿por qué uno de los principales orígenes del conflicto que tuvo lugar entre 2002 y 2007 radica en la figura de la ciudadanía, al traducirse en el cuestionamiento de la nacionalidad marfileña de estos ciudadanos extranjeros, desembocando así en un problema de participación política y exclusión político-cultural en el marco de la operatividad y el ejercicio eficiente de la democracia incluyente?

La respuesta a estas preguntas permite precisar el papel jugado por el advenimiento de la democracia liberal al país en los años 90, bajo el gobierno de Houphouët, insertándose así mismo en el contexto general de la ola de democratización que se vivió en África subsahariana durante dicha década, y que significó un periodo de cambio político hacia la democracia en varios países de la región, cuyos sistemas políticos eran muy marcados por el legado colonial y la dictadura (Wabgou, 1999; Anyang’ Nyong’o, 1999). En efecto, el proceso que

se venía llevando a cabo bajo el gobierno de Houphouët se vio afectado directamente por esta ola de democratización en la región subsahariana, al permitir la aparición de nuevos partidos políticos, y el surgimiento de nuevos actores políticos de la oposición en la contienda electoral. Sin embargo, el presidente Houphouët Boigny de 85 años logró ganar las elecciones de 1990, como líder de su Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI) corroborando los planteamientos de (Van de Walle, 2004: 186), según los cuales a pesar de la transición y de la competencia multipartidista, el régimen unipartidista se las arregla para permanecer en el poder: “[...] En Burkina Faso, Kenia, Camerún, Tanzania y Costa de Marfil, los noventa fueron testigo de las primeras elecciones competitivas en una generación. En cada caso, el funcionario de larga duración ganó, aunque por un margen muy pequeño”. En este contexto, Houphouët Boigny nombró a Alassane Dramane Ouattara (ADO), un ciudadano marfileño, supuestamente de origen extranjero –Burkina Faso–, como Primer Ministro y Henri Konan Bédié fue investido presidente de la Asamblea Nacional en base del artículo 10 de la Constitución. Este es el panorama que se da cuando el Presidente muere en 1993, por lo cual, amparados en la Constitución Bédié, el presidente de la Asamblea General, se vuelve presidente sucesor mientras se organizan nuevas elecciones.

Es aquí donde surgen las causas directas del conflicto que echa sus raíces en las elecciones de 1990, las cuales culminan tres décadas del gobierno de Houphouët (“Houphouëtismo”). Se empiezan pues a perfilar los factores del conflicto, en la medida que la democratización es reveladora del desgaste del poder de la administración Houphouët, ya que desvela serios problemas de la clase política en torno a cuestiones esenciales de

9 Traducción del autor

representatividad y legitimidad política. Es decir que Houphouët Boigny había construido un mito del sentido de supremacía del Estado que era propio a su grupo étnico Akan, uno del mosaico de más de sesenta grupos étnicos del territorio de Costa de Marfil, reagrupados en cuatro grandes familias lingüísticas (los Mandé, Gur, Kru y kwa). Este mito era fundado en dos pilares ideológicos: la ideología etnocéntrica del Estado y la ideología aristocrática de la etnia. Lo que permitió a Houphouët justificar las fuentes de su poder (pretendido carismático) y fundamentar su legitimidad a dirigir a los demás, es decir a quienes pertenecían a otros grupos étnicos: pues pudo consolidar una base ideológica de gestión política de la diversidad social y étnica (Vallin, 2000). Sin embargo, las limitaciones de esta doble ideología legitimista se encuentran en el hecho de que, además de no calar en las lógicas de representaciones políticas formales y escritas como las requeridas por el Estado moderno marfileño sino en las informales, ancestrales y orales, echa sus raíces en el legado colonial pseudo-científico jerarquizante de las razas y las etnias, que opera con base en el Estado y la escritura (Akindès, 2004: 14).

En este orden de ideas relacionadas con la representatividad, legitimidad y participación política en Costa de Marfil de Houphouët Boigny, la permanencia en el poder de Henri Konan Bédié como presidente “sucesor”, le permitió introducir la figura de la “ivoirité”, por medio de un *cambio legal en el código electoral*. Esta figura implicaba que solo podían ser aceptadas las candidaturas de personas cuyos padres y abuelos hubiesen nacido en Costa de Marfil, igual que el candidato. Asistimos así a las derivas totalitarias del régimen Bédié marcadas por la codicia desbordada por el poder, con trasfondo sectario y desin-

tegrador, de la joven nación en construcción. Al concebir su legitimidad social en base a justificaciones ideológicas, políticas y económicas, la retórica de Bédié sobre la “ivoirité” se convierte paulatinamente en la estatización de la misma (“ivoirité”) o en el *establishment*. Produciéndose una ruptura de la visión del régimen Bédié con la línea política de Boigny, siendo ambos miembros del mismo partido PDCI. Mientras que el primero opta por un nacionalismo que, al dejar de ser desarrollista, se vuelve un etnonacionalismo mediante el discurso de la “ivoirité”; el segundo celebró la preeminencia del “Hombre” sobre (en detrimento de) la “Ciudadanía”, y promovió una “apertura funcional” que consistió en la apertura hacia el “Otro” (o la alteridad), sin importar mucho su extranjería, instrumentalizando así los recursos exteriores (incluyendo los recursos humanos foráneos) mediante su participación en los procesos de construcción de la nación.

Con este cambio político, la desencadenada disputa por el poder empieza su largo recorrido en el país como una forma no solo de quien puede o no participar, sino también de quién es o no un ciudadano de Costa de Marfil, de quién posee o no la nacionalidad. En esta disputa, se involucraron los actores políticos principales del país, de los cuales se destacaron el Frente Popular marfileño (FPI, por sus siglas en francés) dirigido por Laurent Gbagbo; la Reunión de los Republicanos de Costa de Marfil (RDR, por sus siglas en francés) dirigido primero por Djéni Kobina y luego por Alassane Ouattara; y el Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI, por sus siglas en francés) como partido en el poder. Así, este cambio en el código electoral generó que la candidatura de Alassane Ouattara fuera rechazada e invalidada para participar en las elecciones de 1995; a esto se agregaron argumentos basa-



dos en la insuficiencia del número de años de residencia en el territorio marfileño, aún sabiendo que su cargo de sub-director del FMI implicaba ausencias de larga duración en el país. Así, las lecciones de este año, fueron ganadas por Henri Konan Bédié. El 24 de diciembre de 1999 Robert Guéï dio un golpe de Estado a Bédié, y pese a que no toma el poder, se mantiene en la agenda política, marcada por el tema de la “*ivoirité*”. Además, cabe precisar que los meses que precedieron al golpe fueron marcados por una atmosfera política pesada, debido a tensiones derivadas de un orden de captura internacional emitida por el gobierno Bédié contra Ouattara, ya líder de RDR, debido a un supuesto delito de falsificación y uso de falsificaciones relacionadas con su dudosa identidad marfileña. Así las cosas, algunos militantes de su partido fueron arrestados y encarcelados. Mediante el tema de la nacionalidad, la cuestión de la ciudadanía fue levantada en el pleno sentido del término; encontrando su respuesta política únicamente en la movilización recurrente del monopolio de la violencia legítima al servicio de las frustraciones, convertidas en verdaderas fuentes de tensiones identitarias trasladadas al campo político. Para las elecciones en el año 2000, la candidatura de Ouattara fue rechazada constitucionalmente: en palabras de Labonté (2006: 65), “[...] la adopción de la Constitución el 23 de julio de 2000 ocurre poco antes de las elecciones presidenciales de octubre del mismo año. Y cuando Ouattara expresó su intención de presentarse en las elecciones presidenciales de 2000, su candidatura fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia por motivos ligados al carácter dudoso de su nacionalidad marfileña”.

En este contexto, tras los comicios electorales del año 2000, se inaugura el periodo presidencial de Laurent Gbagbo del partido

FPI, quien, a pesar de ser crítico de los gobiernos anteriores, reafirma la necesidad de seguir implantando y agitando la cuestión de la “*ivoirité*” como condición esencial que cualifica la elegibilidad de cualquier candidato a las elecciones presidenciales; constituyéndose así en un instrumento excluyente y una estrategia sectaria para sacar del juego electoral a Alassane Ouattara, uno de sus más fuertes competidores. Además esta situación se convierte en la consecuencia de un proceso de jerarquización política de los marfileños ante la Ley, sostenida y promovida directa e indirectamente por varios actores o grupos de actores políticos, mediante la eficiencia de un discurso etnonacionalista; la “*ivoirité*” es a su vez una de las causas principales y directas del conflicto interno. A este espectro de la “*ivoirité*” inscrita en un contexto marcado por la crisis de confianza en la clase política, se agrega la ausencia de ideales políticos capaces de movilizar fuerzas ciudadanas; lo que evidencia literalmente la falta tanto de ética político-cívica, como de mecanismos reales de diálogo en un escenario político, también marcado por el decrecimiento económico, el agudizamiento de las desigualdades sociales, la reducción de la inversión estatal en sectores como la salud y la educación. Sin duda, la situación descrita se convirtió en un caldo de cultivo de las frustraciones políticas en el país que no tardó en desembocarse en el estallido del conflicto interno en el año 2002, conflicto que duró hasta 2007, antes de reanudarse en el año 2010. Entre las fuerzas insurgentes que recurrieron a las armas en contra del poder central de Laurent Gbagbo durante los años 2002-2007, se encuentran, el Movimiento Patriótico de Costa de Marfil (MPCI, por sus siglas en francés), Movimiento Popular Marfileño del Gran Oeste (Mpcigo, por sus siglas francés) y el Movimiento para la Justicia y la Paz (MJOP, por sus siglas en



francés) que se agrupan bajo la denominación Fuerzas Nuevas (FN), las cuales, bajo el mando de Guillaume Soro, demandaban una participación igualitaria en la política, mediante el reconocimiento pleno de la ciudadanía. Por su parte, el sistema político presidencial era defendido por el Ejército Nacional o las Fuerzas Nacionales de Seguridad y un grupo de jóvenes paramilitares denominados “Alianza de Jóvenes Patriotas de Abiyán” (en francés, *Alliance des Jeunes Patriotes d'Abidjan*). Bajo el liderazgo de Charles Blé Goudé, estos jóvenes se auto identificaban como jóvenes nacionalistas que rechazaban la presencia militar francesa en Costa de Marfil, sin importarles que la materialización de esta presencia se fundamentaba en los lazos tradicionales de Amistad y Cooperación entre Francia y Costa de Marfil, establecidos mediante la firma de los Acuerdos de Defensa entre ambos países desde el año 1961.

#### Resolución de conflicto y post-conflicto: acuerdos de paz e intervención internacional

El conflicto de Costa de Marfil pasa, desde su inicio hasta su terminación, por varios acuerdos de paz en los cuales se empezarán a dar avances, en términos de repartición del poder y participación política de los excombatientes, con el acompañamiento de Francia, las respectivas instituciones de integración continental (Unión Africana -UA-) y regional (Comunidad Económica de Estados del África del Oeste -Cedeao-), algunos países africanos, entre otros. Así, desde el inicio del conflicto en 2002, se logró firmar un cese al fuego bajo la ayuda de la Cedeao. Tras dificultades en la aplicación del cese al fuego, hubo necesidad de reunir a las fuerzas implicadas en el conflicto para explorar posibilidades de firma de acuerdos en torno al alto al fuego y el fin definitivo de

la guerra. Por lo tanto, en enero de 2003, se alcanzó a firmar los acuerdos de Marcoussis (en Francia), esencialmente en torno a tres puntos: a) el Presidente Gbagbo permanecerá en el poder hasta las nuevas elecciones; b) los opositores están invitados a hacer parte de un gobierno de reconciliación y obtienen los ministerios de Defensa y del Interior; c) las tropas de la Cedeao y 4.000 soldados franceses de la Operación *Licorne* se posicionan entre los beligerantes y las fuerzas regulares para evitar o prevenir una reanudación del conflicto.

Los acuerdos de Marcoussis (en Francia) se dieron en presencia de la representación de todos los partidos políticos del país, los tres grupos rebeldes y el gobierno. Estos acuerdos plantearon diversas reformas que requerían cambios profundos a nivel constitucional, entre las que estaba la creación de un Gobierno Nacional de Reconciliación cuya función era asegurar la reestructuración de las Fuerzas de Seguridad y la organización de las elecciones. Sin embargo, estos acuerdos que demandaban reformas constitucionales, fracasaron en su aplicación por distintos motivos, entre los cuales se destacan los intereses mezquinos del gobierno de Gbagbo para mantener estáticas las estructuras del poder, al no admitir ni implementar cambios estructurales en el sistema política, según estos acuerdos de Marcoussis. Además, sobresale su carácter hermético, arrogante y prepotente ante cualquier posibilidad legal de traducir estos acuerdos a la práctica, en términos de apertura real de la participación política de todas las demás fuerzas políticas en las elecciones dadas durante el post-conflicto. De igual manera, se registran los reparos hechos por las Fuerzas Armadas a los acuerdos mencionados al cuestionar su legitimidad, por no haber contado con ellas como actores centrales en las discusiones



de la mesa de negociaciones. En este orden de ideas, afianzamos los planteamientos de Mehler (2008: 24) según los cuales las explicaciones del fracaso de la aplicación de los acuerdos de Marcousis se encuentran en “a) el papel de Francia como un mediador condescendiente y b) [...] las reticencias de Abiyán [capital de Costa de Marfil] y sobre todo de la cúpula del ejército a aceptar las posibilidades de que los rebeldes ocuparan puestos políticos: para ellos, era simplemente inaceptable que los rebeldes puedan ocupar el puesto de Defensa y la cartera del Ministerio del Interior, dos ministerios que les concedería una superioridad en todas las cuestiones relacionadas con la Seguridad. Es más, los pasos anteriores que se dieron para invitar a los rebeldes a la mesa de negociaciones en Marcoussis, eran vistos particularmente por la alta jerarquía militar del país y algunos partidarios del régimen como un mecanismo que daría a los rebeldes un peso político que antes no tenían”<sup>10</sup>.

Sin embargo, como bien sabemos, la firma de acuerdos de paz no garantiza necesariamente la paz que se debe construir. Es más, aunque los acuerdos de paz son una condición *sine qua non* para la puesta en marcha de procesos de construcción de paz, resultan inoperantes cuando el grado de confianza entre las partes no se encuentra en su nivel más óptimo. En este sentido, lo que ocurre en Costa de Marfil es que, en medio de zozobras de las poblaciones y acusaciones mutuas entre los beligerantes y las fuerzas gubernamentales en cuanto a la violación del cese al fuego, se reavivan combates en los frentes y las rivalidades en el terreno. Esta situación llevó a que se impulsaran nuevas iniciativas de paz desde el

escenario político nacional e internacional para organizar nuevas mesas de conversación. Así mismo, bajo el liderazgo de la Unión Africana (UA), la Cedeao, las Naciones Unidas, la implicación de Suráfrica y de Francia, entre otros, se logró firmar los acuerdos de Accra II (Accra, capital del país vecino Ghana) en este mismo año 2003.

Pues no cabe duda que los obstáculos a la aplicación de los acuerdos de Marcousis echan sus raíces en la problemática de la participación política y el reconocimiento de la ciudadanía. Sin embargo, estos acuerdos lograron constituirse en la base inicial para los siguientes acuerdos, convirtiéndose en un referente definitivo para los procesos posteriores. Es así como en los acuerdos de Accra II firmados en marzo de 2003, se logró consolidar el Gobierno Nacional de Reconciliación, por medio del cual las Fuerzas Nuevas obtuvieron dos ministerios: el de Comunicaciones y del Manejo Interno del Territorio. Igualmente se estableció un Congreso Nacional de Seguridad que contaba con 13 miembros, en el cual estaban, el presidente, el primer ministro, y los representantes de todas las partes firmantes de los Acuerdos (los partidos políticos, las fuerzas armadas, y los rebeldes). Lo más importante de este Gobierno Nacional de Reconciliación fue su capacidad de nombrar el Primer Ministro que haría una contraposición al poder presidencial.

En medio de la crisis de confianza en la clase política de Costa de Marfil, estos avances se ven opacados por maniobras politiqueras, autoritarias y personalistas del presidente Gbagbo, quien destituyó a los ministros que habían sido nombrados por el Gobierno Nacional de Reconciliación. Asistimos así a una serie de comportamientos políticos contradictorios y nefastos al espíritu de Paz en el escenario político mar-

10 Traducción del autor.

fileño que no auguran la paz perpetua o el fin efectivo de las hostilidades en el terreno. En consecuencia, se produjo un fallido intento de desarme de las Fuerzas Nuevas y no fue posible el cumplimiento del cese al fuego por parte de los actores armados. Pero la necesidad de restaurar la confianza y establecer la paz llevó a la clase política a seguir buscando formulas y caminos para ello, hasta tal punto que se multiplicaron las iniciativas para su consecución.

A continuación, la presencia y presión internacional se hizo más fuerte cuando, en el mes de julio de 2004, se realizaron reuniones que dieron origen a los Acuerdos de Paz de Accra III, con el acompañamiento de la Cedeao, la ONU y la UA, que obligaba al presidente Gbagbo a restablecer los ministros (beligerantes y de otras fuerzas políticas) a los cuales había removido de sus funciones, y a legislar sobre las facultades que debía tener el Primer Ministro. No obstante, dicha presión no impidió que el presidente mantuviera su actitud de incumplimiento de los Acuerdos de paz y su política marcada por el etnonacionalismo, el sectarismo y la segregación en el marco del desenvolvimiento del espíritu de la “ivoirité”, asociado a discursos anti-franceses, al ejercicio recurrente de la violencia simbólica contra el Norte del país donde se encuentran buena parte de los seguidores de Alassane Ouattara y al recurso al monopolio de la violencia legítima. A esto, se suman los hechos de finales del 2004, cuando las Fuerzas Armadas de Costa de Marfil, atacaron un campamento francés, establecido en el territorio a partir de los tradicionales acuerdos militares entre Francia y Costa de Marfil. La reacción de Francia no se hizo esperar en la medida que sus represalias consistieron en destruir las logísticas de las Fuerzas Aéreas del país, por lo cual se generó un gran oleada de violencia y una

polarización de las posturas con respecto a la presencia francesa en el país y la problemática intervención de Francia en el territorio.

Pues oficialmente, el interés de Francia para intervenir en Costa de Marfil (intervencionismo francés en Costa de Marfil) se justifica por lo siguiente: a) el cumplimiento al deber de protección militar en caso de ataque exterior o intento de desestabilizar a Costa de Marfil, bajo los acuerdos de defensa firmados en abril de 1961 por los dos Estados; b) los rebeldes, aun siendo nacionales de Costa de Marfil, son considerados por el gobierno de Costa de Marfil como extranjeros; c) el deber de asegurar la protección de los franceses y los ciudadanos occidentales, igual que la de sus bienes (varias Pymes están en manos de los franceses); d) evitar una tragedia como la de Ruanda en la que intervino “tardíamente” para evitar el genocidio. Desde la perspectiva institucionalista y realista de las relaciones internacionales, éstas fueron las razones que motivaron la intervención de Francia en Costa de Marfil. Sin embargo, eso no impediría que dicha nación fuera pronto acusada de querer proteger únicamente sus intereses y mantener propósitos neocolonialistas en el país y la región. Además, Francia se vio en una situación más incómoda cuando las dos bandas rivales le acusaron de favorecer a una de ellas: por un lado, los leales a Gbagbo consideraban que Francia protegía a los rebeldes y su actuación no respondía completamente al espíritu de la aplicación de los acuerdos de defensa de antaño con Costa de Marfil; por otro, los rebeldes acusaban a las Fuerzas francesas de impedirlos o dificultarlos la toma de Abiyán.

En este contexto, vale la pena señalar que Suráfrica, como potencia regional en África, comienza a jugar su papel de “pacifica-



dora” en Costa de Marfil cuando, en el mes de noviembre de 2004, el presidente surafricano Thabo Mbeki quien, en cumplimiento al mandato de la Unión Africana, empieza a actuar como mediador en la resolución del conflicto interno de Costa de Marfil. Al respecto, estableció una ruta en torno a cinco puntos: 1) un programa legislativo que excluye el artículo 35 de la Constitución sobre las condiciones de elegibilidad a la Presidencia de la República, ratificando el nuevo artículo 35 de la legislación con el apoyo del Comité de Seguimiento de los Acuerdos de Paz de Marcoussis; 2) desmovilización, desarme y reintegración de soldados desmovilizados (DDR); 3) creación de un clima propicio a distintas expresiones de libertad política y actividades políticas, e insistencia en la restauración de la dirección de la Radio Televisión marfileña, la reanudación de las patrullas conjuntas de las fuerzas de seguridad/Onuci, el llamado a los medios de comunicación para que eviten el uso de lenguajes que incitan al odio, igual que a los jóvenes patriotas para que abandonen las protestas intempestivas en las calles; (4) funcionamiento del gobierno de reconciliación nacional y fortalecimiento de las garantías de seguridad para los miembros del gobierno; (5) restauración de servicios sociales y rehabilitación de la administración a lo largo y ancho de todo el territorio de Costa de Marfil.

Pero desafortunadamente, lo anterior no ha favorecido ni la efectividad, ni la culminación de la aplicación de los acuerdos de Accra III; situación que condujo a que, en el verano de 2005 se llevaran a cabo los acuerdos de Pretoria (Sudáfrica) en los cual se resaltó la debilidad y ausencia de actividades políticas de los partidos políticos de la oposición en el país, por lo cual los principales líderes (Gbagbo, Ouattara, Bédié, Soro y Diarra) cobraron mayor relevancia,

protagonismo y visibilidad en estos espacios de negociación. Sin embargo, este esfuerzo para encontrar una salida negociada al conflicto se vio debilitado por el aplazamiento *sine die* de las elecciones que debían ser llevadas a cabo ese año, por el presidente Gbagbo, quien se esforzó en convencer tanto a la comunidad internacional como al país de que las elecciones no eran viables en el contexto de violencia generalizada que estaban viviendo. En este sentido, no cabe duda que este aplazamiento de las elecciones va a contribuir al agudizamiento del conflicto y la ineffectividad de los acuerdos anteriormente firmados.

Habría que esperar hasta el año 2007 para celebrar la firma de los acuerdos de Ouagadougou (Burkina Faso), firma que se caracterizó por la ausencia de todo tipo de agentes (o entes) internacionales (o foráneas), excepto el mediador principal Blaise Compaoré, presidente de Burkina Faso. En medio del desgaste político de los poco más de cinco años de guerra, se produjo una concertación para la firma de estos acuerdos, concebida como el resultado de la labor asumida principalmente por Guillaume Soro, líder de las Fuerzas a Nuevas, y el presidente Gbagbo. En dichos acuerdos, se refleja claramente un diagnóstico acertado acerca del problema central del conflicto, a saber, el de la “ivoirité”. Es decir, por primera vez en la historia de los procesos de conversación de paz en Costa de Marfil, se identifica claramente la “ivoirité” como punto central de las confrontaciones o disputas bélicas. Así mismo, se evidenciaron expresiones de voluntad política por las partes para reconocer que el problema principal radica allí, y que la superación de este obstáculo abriría enormes posibilidades de pacificación del país. Entonces, tras la firma de los acuerdos de Ouagadougou, se observa que su impacto inmediato sobre



la orientación del curso de la política nacional y exterior del país se refleja a través de la *apuesta por una reforma al sistema de participación política electoral, mediante la modificación del sistema de identificación y registro de los ciudadanos en todo el país que permita un sistema electoral más incluyente*. De hecho, la puesta en marcha de esta reforma permitió el reconocimiento pleno de la ciudadanía a un gran número de personas que, como Alassane Ouattara, antes no usufructuaban de ésta. Por consiguiente, el “nuevo” orden político derivado de estos acuerdos posibilitó la validación de las candidaturas que, durante los comicios electorales anteriores, fueron rechazadas.

De igual manera, estos acuerdos de Ouagadougou posibilitaron la construcción de mecanismos consensuados para la formación de un *Ejército Unificado* que reunía a excombatientes y a integrantes de las fuerzas oficiales, con la tarea de generar la seguridad necesaria para el desarrollo del ejercicio democrático de las elecciones; lo que iría abriendo así caminos y espacios de construcción de confianza con el objetivo de alcanzar la finalización efectiva del conflicto. Adicionalmente, con el fin de garantizar y asegurar la aplicación de estos acuerdos de Ouagadougou, se establecieron dos órganos de control, monitoreo y seguimiento de la implementación de los mismos: “el acuerdo creó dos cuerpos de alto nivel, el Marco de Consulta Permanente (MCP) y el Comité de Evaluación y Monitoreo (CEM), para facilitar la continuación de las conversaciones directas. El MCP, compuesto por el presidente Gbagbo, el ex combatiente Soro, los candidatos presidenciales Ouattara y Bédié, y el presidente de Burkina Faso Blaise Compaoré, es el órgano de supervisión y diálogo permanente. El CEM que supervisa la aplicación del acuerdo, está compuesto por el facilitador y tres

representantes tanto del lado del gobierno como de las Fuerzas Nuevas (FN)”<sup>11</sup> (Bakarr Bah, 2010: 613). En todo caso, los temas de la preparación de las próximas elecciones, seguidas de la unificación de las fuerzas armadas de las Fuerzas Nuevas (FAFN) y las Fuerzas Armadas Nacionales de Costa de Marfil (Fanci) se situaron en el centro de los debates que llevaron a la firma de estos Acuerdos de Ouagadougou.

Sin embargo, los lineamientos de los Acuerdos de 2007, que planteaban la creación de un solo ejército, han conllevado que “a pesar de algunos progresos en el interior de las Fuerzas marfileñas, persisten divisiones entre integrantes de las antiguas fuerzas de defensa y seguridad (FDS) bajo la Presidencia de Laurent Gbagbo, y los elementos de las fuerzas armadas de las Fuerzas Nuevas (FAFN), la antigua rebelión. Ni su comportamiento, ni los términos de su integración en el nuevo ejército, las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (FRCI), fueron favorables [ni suficientes] para la reconciliación. Los caciques de la jerarquía militar de las antiguas Fuerzas Armadas siguen gozando de privilegios, mientras que la policía y la gendarmería permanecen como los más desfavorecidos del sistema de defensa y seguridad” (International Crisis Group, 2012)<sup>12</sup>. Además, “un elemento crítico de las negociaciones, y no mencionado en el texto de los acuerdos de Ouagadougou, es el pacto de compartir el poder entre Gbagbo y Soro. Gbagbo nombró a Soro como Primer Ministro poco después de firmar los acuerdos. Este arreglo no sólo satisfizo los egos políticos de los dos líderes, sino también les dio una influencia considerable sobre el futuro político del país. Gbagbo salvó su presiden-

11 Traducción del autor.

12 Traducción del autor.



cia y obtuvo una sólida plataforma desde donde pudo lanzarse para buscar su reelección. Como un poderoso Primer Ministro, Soro tiene que hacerse una posición fuerte para asegurar la aplicación de los acuerdos y entregar a los norteños sus documentos de ciudadanía. Para Soro, este ejercicio político se convirtió en una reivindicación de la rebelión y un camino para convertirse en un héroe en el Norte del país” (International Crisis Group, 2012, )<sup>13</sup>

A continuación, tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2010, el presidente Laurent Gbagbo se niega a dejar el poder en manos del candidato Alassane Ouattara (líder del partido RDR) que ha ganado las elecciones. Mientras que la Comisión Electoral Independiente de Costa de Marfil (CEI) declaraba a Alassane Ouattara ganador de la segunda ronda de la elección presidencial, el Consejo Constitucional, favorable a Gbagbo, rechazaba este resultado y proclamaba a Gbagbo vencedor de estas elecciones. Esta situación desata tensiones y crispaciones a nivel nacional donde Ouattara goza mucho más del apoyo de amplios sectores de las poblaciones norteñas de Costa de Marfil. Y, a nivel internacional, la ONU reconoce la victoria de Ouattara, igual que la Unión Europea (UE), Francia y Estados Unidos que felicitan a Ouattara y solicitan a Gbagbo dejar el poder.

En el continente africano, asistimos a la suspensión de Costa de Marfil como país miembro de la Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste (Cedeao) que pide a Gbagbo entregar el poder; igual que la Unión Africana (UA) la cual adopta la misma postura. Además de beneficiarse del aval internacional como vencedor de los

comicios, se ejercen presiones internacionales sobre el régimen de Gbagbo y se impone un bloqueo económico sobre el país.

En medio de toda esta confusión, opera una rebelión armada compuesta principalmente de fuerzas armadas y leales a Ouattara. Sin duda, esta rebelión, se beneficia del apoyo de las Fuerzas francesas posicionadas en el país, y logra arrestar a Gbagbo en el mes de abril de 2011 para trasladarlo al norte del país desde donde más tarde, fue entregado a la justicia de Costa de Marfil. Con el apoyo de Francia y la ONU, la Fiscalía de Costa de Marfil hizo la entrega del ex-presidente Gbagbo a la Corte Penal Internacional de la Haya en el mes de noviembre de 2011, acusándolo de crímenes contra la humanidad durante las violencias desatadas por medio de las elecciones de 2010. Pues parece que existen pruebas de violaciones a gran escala de los derechos humanos, incluyendo asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual sobre todo en Abiyán, la capital. Desde el mes de diciembre de 2011 hasta la actualidad (año 2013), se está desarrollando el juicio del expresidente Gbagbo en la Haya. A su vez, desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se puso en marcha investigaciones sobre los casos de violación de derechos humanos en el país.

Esta situación pone fin a la administración y terquedad política de Gbagbo y al conflicto interno que ha dejado cientos de muertos, desplazados y refugiados en ese país africano; lo que posibilita la toma de posesión de Alassane Ouattara en mayo de 2011, como presidente electo de Costa de Marfil. A su vez, Guillaume Soro, excombatiente y líder de las Fuerzas Nuevas es elegido presidente de la Asamblea Nacional. Ouattara pidió a las Fuerzas de Seguridad Nacional, la Misión de Operaciones de la ONU en Costa

13 Traducción del autor.

de Marfil (Onuci) y a los militares franceses instalados en el país que velen por la seguridad de los habitantes y de los bienes en el conjunto del territorio marfileño; así mismo, se espera que ayuden a su gobierno a establecer la seguridad en un país azotado por el conflicto interno, y a desarmar a los combatientes al margen de la ley en el periodo post-conflicto.

Ante el fracaso de Accra II, hubo necesidad de organizar negociaciones para firmar sucesivamente los acuerdos de Accra III en 2004; los acuerdos de Pretoria (Sudáfrica) en 2005 y finalmente los acuerdos de Ouagadougou en el 2007. La recaída en operaciones bélicas en el año 2010, en medio de disputas electorales en Costa de Marfil, ha desembocado en el hecho de que el manejo del fin del conflicto se dé con una fuerte dosis de intervencionismo internacional.

Ahora, en Costa de Marfil, se abre el camino a la Paz y reconciliación bajo el gobierno de Alassane Ouattara. No obstante, no sobra señalar que se trata de la “Paz de los vencedores” en la medida que se impone la lógica de Paz según sus criterios; dejando a los vencidos someterse al “diktat” del sector triunfador; situación que no le quita la legitimidad a la construcción de Paz. Aunque existen acusaciones de las partes (Fuerzas leales a Gbagbo y combatientes simpatizantes de Ouattara) implicadas en el conflicto por haber cometido crímenes de todo tipo, las dos órdenes de detención dictadas hasta la fecha por la CPI en relación con Costa de Marfil se centran en presuntos crímenes cometidos por las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Costa de Marfil, así como las milicias juveniles y bandas de mercenarios leales al ex-presidente Gbagbo. Es más, cuando tomó posesión, el nuevo presidente Alassane Ouattara evocó la creación de una Comisión de Verdad y Reconciliación

(CVR), una jurisdicción no judicial, para esclarecer todos los crímenes y matanzas cometidos en el país durante los últimos años y obrar para establecer la Paz. Habrá que esperar hasta septiembre de 2011 para asistir a la creación de la Comisión de Diálogo, Verdad y Reconciliación (CDVR) en Costa de Marfil que inició su funcionamiento con la instalación de sus comisiones locales a lo largo y ancho del país, a finales de febrero del año en curso (2013). Se espera brindar a los integrantes de estas comisiones capacitación y formación necesaria para que su jurisdicción pueda jugar cabalmente su papel, y cumplir con las expectativas de establecer la verdad en los casos de violaciones de todo tipo, hacer justicia y reparación a las víctimas, construir la paz entre los pueblos mediante procesos de restauración de confianza y generación de espacios de concertación (o negociación) para la reconciliación.

Reflexiones sobre la participación política de los excombatientes en Costa de Marfil: ¿enseñanzas para Colombia? Por participación política en escenarios de post-conflicto, entendemos las dinámicas de transformación de los actores al margen de la ley en actores políticos activos dentro de la legalidad; es por ello que el tema cobra mayor trascendencia en la búsqueda de acuerdos de paz. Estas dinámicas suelen inscribirse en el marco de las garantías brindadas por el sistema electoral a todas las fuerzas políticas del país, con el fin de poder competir en igualdad de condiciones con los partidos tradicionales y movimientos políticos. Esta situación convoca a los desmovilizados, excombatientes y ex guerrilleros, a contar con garantías para buscar la adhesión de las poblaciones a sus ideas y propuestas políticas, con el propósito de ganar las elecciones, tal es el caso de la formación política o a través del juego de alianzas y acuerdos, propios de



la dinámica política de la democracia liberal. Es por ello que en muchos casos, como el de Costa de Marfil, se requieren reformas al sistema de participación política electoral con el fin de responder a la coyuntura derivada de las conversaciones de paz y garantías de transparencia e igualdad para la competencia político-electoral. Lo anterior se suele explicar por las limitaciones y desventajas de los ex combatientes en materia de experiencias de campañas electorales y acceso a los medios de comunicación. Además, es necesario apuntar a los riesgos que corren en materia de inseguridad o falta de garantías para su integridad física.

Entonces, desde las experiencias de Costa de Marfil, reseñamos algunos elementos de reflexión para alimentar el debate en torno a la necesidad de apostar por la participación política de los insurgentes en Colombia en la era post-conflicto. En primer lugar, no se puede separar el desarrollo de la participación política de las fuerzas disidentes y del proceso de resolución del conflicto armado, más aún cuando en Costa de Marfil, el establecimiento de la “ivoirité”, una forma de etnonacionalismo basado en un pseudonacionalismo de Estado, que excluye a ciertas personas del ejercicio de la participación política (y ¿por qué no de la participación ciudadana?), es una de las razones principales por las cuales se inicia y se prolonga el conflicto armado. La conflictividad entre las partes rivales refleja una centralidad de la pugna por una participación política más incluyente y no sectaria, ni tampoco basada en lógicas etno-nacionalistas. A la luz de esta situación marfileña, pensamos que *la gestión del post-conflicto* colombiano también requiere la proyección de soluciones u opciones viables en torno a la *participación política de los insurgentes* puesto que son dos procesos inminentemente ligados: de las posibilidades de participación política

de los ex combatientes, suele depender *en parte* el éxito del post-conflicto.

En este sentido, el conflicto de Costa de Marfil terminó contrariamente a la forma como inició; es decir que solo cuando *se acordó realizar una reforma electoral* que permitía una competencia democrática, participativa y pluralista desde distintas orillas del pensamiento, se auguró el fin del conflicto de Costa de Marfil. Pues, con dificultades y recaídas en la violencia la experiencia marfileña corrobora la idea según la cual la firma de los acuerdos no se constituye, *ipso facto*, en una garantía absoluta de terminación del conflicto armado, y menos aún de la construcción de la paz. Sin embargo, esta reforma electoral derivada de los acuerdos de Ouagadougou en 2007 permitió que Alassane Ouattara pudiese participar en las contiendas electorales del año 2010, de las cuales salió victorioso; contrariamente al año 2005 cuando le fue negado toda posibilidad de ser candidato a las elecciones presidenciales por considerar dudosa su nacionalidad marfileña. Así, es de precisar que, existió una alianza entre la Reunión de los Republicanos (RDR), partido político de Alassane Ouattara, y los guerrilleros de las Fuerzas Nuevas: alianza que fue provechosa para los rebeldes en la medida que, tras la victoria del RDR, Guillaume Soro, excombatiente y líder de las Fuerzas Nuevas es elegido presidente de la Asamblea Nacional, en su condición de diputado del partido político RDR de Alassane Ouattara.

Aun si la particularidad de la figura de Guillaume Soro y sus lazos con las bases rebeldes invita a cuestionar el grado de participación política del conjunto de las fuerzas guerrilleras en el país; y pese al carácter reciente del conflicto en Costa de Marfil comparado con el caso colombiano, es de



señalar la necesidad de crear espacios favorables a esta participación política y a la ciudadanía de amplias capas de las poblaciones campesinas, los pueblos indígenas y afrocolombianos que han sido históricamente limitados o excluidos en/de estos procesos participativos por los prejuicios existentes sobre sus posibles nexos con las guerrillas, los paramilitares y los traficantes de droga. Las experiencias de Costa de Marfil, en medio de los múltiples acuerdos de paz, evidencian que aunque no existió una política clara de participación política de los *excombatientes pertenecientes a las amplias bases* de los ejércitos rebeldes, el tema ha estado siempre presente en las negociaciones de Paz. Pues, todo indica que los acuerdos tuvieron un enfoque más personalista que colectivo, al priorizar más bien el protagonismo de la cúpula guerrillera en escenarios políticos; esto es, la participación política de los líderes de la insurgencia, especialmente de Guillaume Soro. Este personaje pasó de ser un líder estudiantil (de la Federación Estudiantil y escolar de Costa de marfil -Fesci-) entre 1995 y 1998, a un jefe de los rebeldes de las Fuerzas Nuevas en el año 2000, antes de integrar el Gobierno de Reconciliación Nacional de Gbagbo entre 2003 y 2005, y ocupar el puesto de Premier Ministro del gobierno derivado de los Acuerdos de Ouagadougou en 2007; ser reconducido en su puesto de Primer Ministro por el gobierno de Alassane Ouattara a mediados de 2011; y convertirse en el Presidente de la Asamblea Nacional desde marzo de 2012 hasta la actualidad.

Aquí pues, observamos que no ha habido una vinculación directa de las bases de los ex grupos armados, con los ámbitos de toma de decisiones o por medio de la creación de nuevas fuerzas políticas o nuevas organizaciones de la misma índole, que puedan incluir de manera directa a los ex-

combatientes para desarrollar una incidencia política. Esta situación convoca a una mayor reflexión ante el protagonismo que está tomando cada vez más los negociadores de ambas partes en el caso colombiano, como resultado de las dinámicas de los diálogos o las negociaciones de paz entre el gobierno y el equipo negociador de los insurgentes. Aunque es necesario iniciar los procesos de paz entre un número reducido de interlocutores de las partes, sería oportuno ir haciendo proyecciones políticas con el propósito de ir contando paulatinamente con otros aliados estratégicos en el territorio nacional, para no correr el riesgo de conceder un carácter más exclusivo e individual que amplio y colectivo a la participación política de los excombatientes en el post-conflicto. El mantenimiento del carácter reducido de los interlocutores en las negociaciones de la Paz, pese a las insistentes demandas de varios sectores de la población colombiana, para ser parte directa de la mesa de conversaciones en la Habana, se inscribe en este orden de ideas. Aun así, pensamos que, *en el estado actual de los avances de la mesa*, su ampliación a otros sectores de la población se volvería una situación demasiado engorrosa. Es aquí donde afianzamos el proceso en marcha entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, reconocida por el propio gobierno nacional como la más importante organización armada del país, mientras que nos hacemos preguntas sobre los motivos por los cuales no existe todavía en la agenda política del país, un posible proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por ejemplo.

En cuanto a las garantías de seguridad para la integridad física de los excombatientes, como una dimensión fundamental de su participación política en la era post-conflicto, vale la pena señalar que en Costa de



Marfil, Guillaume Soro tuvo que escapar a varios atentados contra su vida a lo largo de su desempeño político como líder-activista del equipo negociador de las fuerzas rebeldes. Aunque no se ha podido establecer con claridad los autores de estos atentados, y de que se privilegia la pista de los seguidores de Gbagbo (sectores más radicales de las Fuerzas Armadas de Costa de Marfil y los grupos paramilitares de los jóvenes patriotas), se podría también pensar que sus autores eran elementos de su propio ejército rebelde (Fuerzas Nuevas -FN-) que le habrían acusado de no haberles consultado debidamente antes de firmar los acuerdos de Ouagadougou en 2007. Por eso, reiteramos nuestra idea según la cual, las conversaciones de Paz de la Habana deben proyectar líneas generales de una política pública de seguridad que garantice la integridad física de los excombatientes que participarán de la actividad política en el post-conflicto y evite su secuestro o intentos de secuestro, su desaparición o atentados contra su vida, su asesinato extrajudicial igual que el de dirigentes, simpatizantes y militantes cercanos a la ex guerrilla; como queda registrado en la historia de Colombia con los casos de la UP, el EPL y el M-19, entre otros.

Por último, el post-conflicto en Costa de Marfil desvela el carácter incipiente de las políticas que buscan establecer el desarme, operar la reinserción, construir la reconciliación y la paz en el marco del funcionamiento efectivo de la Comisión de Diálogo, Verdad y Reconciliación (CDVR). Por lo cual, todavía existen un alto número de personas armadas en Costa de Marfil, las cuales en muchas ocasiones se encuentran en situación de pobreza (Corey, 2013). Pese a estas limitaciones de carácter reciente en el caso marfileño, para Colombia la apuesta, propia de la constitución de Comisiones de

Verdad y Reconciliación, (CVR) sería una opción viable para poder iniciar procesos de sanación de las heridas causadas por el conflicto interno y de larga duración, igual que mecanismos de restauración de confianza entre los actores políticos y el conjunto de los sectores de la sociedad civil con el fin de construir y consolidar la paz.

Todo este panorama muestra claramente la importancia de tener presente que la firma de los acuerdos no garantiza la resolución del conflicto, ya que donde no se realiza una reforma profunda al sistema electoral, se corre el riesgo de reincidir en las prácticas tradicionales excluyentes y clientelares, siempre criticadas por los beligerantes y generar nuevos brotes de violencia. Es más, esta reforma del sistema electoral debe ir ligada a la idea de que no es suficiente lograr una participación política eficiente con solo las cabezas de los ex grupos armados, ya que siempre cabe la posibilidad de que se genere una ruptura entre las bases y sus líderes, causando un obstáculo para el proceso de desarme que suele ser frenado por las tentaciones de establecimiento de alianzas con grupos paramilitares, bandas de traficantes de drogas y otros grupos criminales, entre otros. Todo lo anterior puede servir de referencia y experiencia para el caso colombiano, en la medida que, igual que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las Fuerzas Nuevas (FN) fueron un actor con un carácter nacional en Costa de Marfil y que tuvo varios frentes y divergencias en su composición. La búsqueda de una participación política que involucre a las bases, más allá de los personajes sobresalientes de las FARC, igual que los de ELN y demás, sería clave para un proceso de Paz exitoso en términos de participación política en Colombia.

## Bibliografía

- Anyang' Nyong'o, Peter. (1999). "Institucionalización del Gobierno Democrático en el África Subsahariana". *Estudios de Asia y África*, No. XXXIV, vol. 1, pp. 13-32.
- Akines, Francis. (2004). "Les racines de la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire", *Série Monographies CODESRIA*. Dakar (Senegal), June 8, p. 51.
- Bakarr Bah, Abu. (2010). "Democracy and Civil War: Citizenship and Peacemaking in Cote d'Ivoire". *African Affairs*, 109/437, pp. 597-615.
- Benegas, Richard. (2011). "Post-election crisis in Côte d'Ivoire: The Gbonhi war". *African Affairs*, 110/440, pp. 475-468.
- Bouquet, Christian & Kassi-Djodjo, Irène. (año ?) "Les elections législatives en Cote d'Ivoire marquent-elles la sorti de crise?" EchoGéo. Disponible en <http://echogeo.revues.org/13017?lang=en>
- Corey Boulet, Robbie. (2013 May 13). "Ex-Combatants Face Uncertain Future Ivory Coast". Voice of América. News/Africa. En línea: <http://www.voanews.com/content/excombattants-face-uncertain-future-in-ivory-coast/1659849.html>
- International Crisis Grup. (2012 nov. 26). "Côte d'Ivoire: Faire baisser la pression". *Rapport Afrique* N°193.
- Labonté, Nathalie. (2006). *La guerre civile en Cote d'Ivoire: L'influence des facteurs économiques politiques et identitaires*. Québec: Institut Québécois de Hautes Études Internationales, Université Laval.
- Melher, Andreas. (2008). "Côte d'Ivoire" en: "Not Always in the People's Interest: Power-sharing Arrangements in African Peace Agreements". *German Institute of Global and Area studies GIGA*, No 83.
- Straus, Scott. ( 2011). "It'ssheer horror here: Patterns of ViolenceduringtheFirstfourmonths of Côtéd'Ivoire's Post-electoral crisis". *AfricanAffairs*, 110/440. pp. 481-489.
- Sylla, Lancine. (2005). "Primacía del partido, primacía del Estado. La cuadratura del círculo político africano de la época del monopartidismo", en Mbuyi Kabunda Badi & Carlo Caranci (coords.) *Etnias, Estado y Poder en África*, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria, pp. 209-235.
- Thonnyen, Jean Jacques.(año?). *Costa de Marfil: Conflicto armado post-electoral, Crímenes de guerra y respuestas del nuevo régimen y de la Corte Penal Internacional*.
- Wabgou, Maguemati. (1999 diciembre). *El largo proceso de democratización en África subsahariana: El viento del Este*. Malmö- Suecia : Liberación pp. 22-23.
- Vallin, Jacques. (2000 24 octubre-6 novembre). "Côte d'Ivoire: Mosaïque Culturelle et Identité Nationale". *Jeune AfriqueL'Intelligent*, n°2076-2077, pp.36-37.
- Van De Walle, Nicolas. (2004 enero-junio). "Elecciones sin democracia. La gama de los regímenes de África". *Estudios Políticos* No. 24. Medellín, pp. 179-195.



